

COMUNICADO DE PRENSA

Contactos de prensa

(Berlín):

Sarah Tyler

Tel: +49 30 3438 2019

press@transparency.org

(Londres):

Jana Kotalik/Susan Côté-Freeman

Tel: + 44 20 7981 0347

Jeff Lovitt (móvil): +49 162 419 6454



TRANSPARENCY INTERNATIONAL

1993-2003 10 años de lucha anticorrupción

<http://www.transparency.org>

Otto-Suhr-Allee 97-99

10585 Berlín, Germany

Tel: +49-30-3438 2061/19

Fax: +49-30-3470 3912

PARA LA PRENSA: para solicitar una copia del Informe Global de la Corrupción 2003 o para visualizar el informe en formato electrónico, contáctese gcr@transparency.org o visite www.globalcorruptionreport.org

Puntos relevantes del Informe Global de la Corrupción 2003 de Transparency International

Dinero para sección editorial: Prácticas no éticas de los medios salen a la luz

Aceptar efectivo a cambio de contenido editorial y otras prácticas no éticas de los medios son usuales en todo el mundo, especialmente en Europa Oriental y del Sur y en Latinoamérica. Una encuesta realizada por la Asociación Internacional de Relaciones Públicas (IPRA) concluye que ninguna región está exenta. La encuesta, publicada en Julio de 2002, consultó a 242 profesionales de relaciones públicas y comunicaciones en 54 países.

Casi dos tercios (63%) de los encuestados en Europa Oriental cree que *zakazukha* – una palabra rusa que denota la aceptación de sobornos por periodistas a cambio de contenido editorial - es moneda corriente en sus países. Sólo el 13% de los consultados en Europa Oriental cree que el contenido editorial "usualmente" o "siempre" responde a un juicio editorial más que al soborno. En Europa meridional, África y el Medio Oriente, el 40% de los encuestados cree que el contenido editorial es habitualmente influido por sobornos.

Asia se percibe como la cuna de los medios más transparentes del mundo. El 68% de los consultados respondió que el contenido editorial usualmente o siempre responde a un juicio editorial más que a sobornos. Norteamérica la sigue con un 65%, Australia con un 60% y Europa del Norte/Occidental con un 59%.

¿Los periodistas y directores aceptan sobornos para no publicar un artículo? En Latinoamérica, el 41% de los encuestados dice que a menudo se aceptan sobornos.

El rol de los medios

Edgar Damalerio, director gerente del semanario filipino *Zamboanga Scribe*, fue asesinado el 13 de Mayo de 2002. Era bien conocido por criticar la corrupción entre los políticos locales y la policía. Valery Ivanov, director del periódico *Tolyatinskoye Obozreniye* en Togliatti, sur de Rusia, fue asesinado el 29 de Abril de 2002. El periódico era bien conocido por sus artículos sobre el crimen organizado y la corrupción oficial.

En Bangladesh, Harunur Rashid, periodista del diario *Dainik Purbanchal*, fue asesinado después de escribir varios artículos sobre la corrupción oficial y los vínculos entre sindicatos delictivos y los proscritos grupos guerrilleros maoístas. Orlando Sierra Hernández, columnista del periódico colombiano *La Patria*, recibió un balazo en la cabeza el 30 de Enero de 2002, y murió dos días después. Sus columnas a menudo atacaban la corrupción gubernamental.

MATERIAS REGIONALES RELEVANTES del Informe Global de la Corrupción 2003 de Transparency International

Europa Occidental

La importancia de procesar judicialmente los casos de soborno dentro del sector privado pasó a las primeras planas con el paso por los tribunales **británicos** del mayor escándalo de soborno en dos décadas. El CEO de Hobsons, un fabricante de alimentos, fue llevado ante la justicia, acusado de sustraer

£2,4 millones (USD 3,8 millones) de la cuenta bancaria de una subsidiaria a fin de suscribir un lucrativo contrato con Co-operative Wholesale Society (CWS). Dos funcionarios jerárquicos de CWS fueron condenados por recibir pagos corruptos por £1 millón cada uno.

En **Alemania**, inmediatamente después del escándalo por el financiamiento de los partidos políticos en el cual la Unión Democrática Cristiana (CDU) se ha visto enredada desde 1999, el Partido Demócrata Socialista (PDS) gobernante se empantanó en su propio escándalo de financiamiento en Marzo de 2002. Se acusó a los funcionarios del PDS en Colonia de haber recibido EUR 260.000 (USD 257.000) de donantes corporativos entre 1994 y 1999. A pesar de que ya lleva algunos años, este escándalo derivó en un implorante avance en la toma de conciencia pública, con el consiguiente reconocimiento de la sistémica corrupción municipal en Alemania.

El gobierno **británico** dio un paso más que otros países de la **OCDE** cuando promulgó legislación antisoborno en Febrero de 2002 con la intención de alinear el derecho británico con la Convención Antisoborno de la OCDE. A diferencia de la legislación vigente en otros países de la OCDE que penaliza el cohecho de funcionarios extranjeros, la nueva ley también penaliza los llamados "pagos de facilitación". La Confederación de Industrias Británicas criticó la prohibición de los pagos de facilitación - pequeños pagos realizados para "acelerar" los trámites gubernamentales de rutina - argumentando que podría poner a las compañías británicas en una desventaja competitiva.

El primer ministro de **Italia**, Silvio Berlusconi, y algunos de sus colegas enfrentaron acusaciones de corrupción y falsa contabilidad, pero él transformó la lucha anticorrupción en una lucha contra los jueces de investigación. A fines de 2001, el parlamento adoptó una nueva ley que obstaculiza gravemente el trabajo de los magistrados. La declaración de cuentas falsas ya no es un delito en Italia, un cambio que puede crear un fuerte incentivo para el lavado de dinero. Otros obstáculos se colocaron en el camino de los jueces que entienden en causas relacionadas con la corrupción y la mafia, como la remoción de su custodia personal. En Enero de 2002, el relator especial sobre la independencia de los jueces y abogados de Naciones Unidas instó a la administración Berlusconi a respetar los principios básicos de Naciones Unidas sobre la independencia del poder judicial.

El gobierno federal de **Alemania** presentó una medida al parlamento en Abril de 2002 que permitiría la creación de un Registro de Compañías No Confiables. El registro llevaría un padrón de compañías que hubieran sido descubiertas pagando sobornos, utilizando empleados ilegales o que de cualquier otra manera se hubieran involucrado en actividades ilegales. Desgraciadamente, la propuesta encontró resistencia. El proyecto de ley fue tratado dos veces en la cámara alta del parlamento alemán (Bundesrat), donde la oposición tenía la mayoría de voto.

Las investigaciones de corrupción en el banco **español** BBVA abrió las puertas de uno de los mayores escándalos dentro del sector bancario europeo en años. La investigación penal, que comenzó en Abril de 2002, se relacionaba con actividades dentro del Banco Bilbao Vizcaya antes de su fusión con el banco Argentaria en 1999. Se alegó que el banco había depositado EUR 225 millones (USD 223 millones) en cuentas secretas en Jersey, Liechtenstein y Suiza. También se alegó que las cuentas secretas habían sido utilizadas en fraudes, malversaciones y lavado de dinero. Además, el dinero supuestamente se desvió para financiar la campaña electoral del presidente de Venezuela Hugo Chávez, y del ex presidente de Perú Alberto Fujimori.

Varias constructoras multinacionales, inclusive compañías de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Suiza enfrentan un procesamiento judicial en la causa contra Lesotho Highlands Development Authority. Mientras que el caso Lesotho es un raro ejemplo en el sentido de que una compañía occidental es llevada ante la justicia por acusaciones de soborno en virtud de la legislación nacional de un país en desarrollo, la incorporación gradual de la Convención Antisoborno de la OCDE en la legislación nacional de sus países miembro transforman al cohecho de funcionarios extranjeros en un acto sumamente peligroso. Sin embargo, el Índice de Fuentes de Soborno 2002 de TI reveló que el nivel de concientización de la Convención de la OCDE era deplorable.

Norteamérica

En Marzo de 2002, el Congreso de **Estados Unidos** implementó su primera gran reforma de financiamiento de campaña en más de 25 años. La ley McCain-Feingold proscribió las contribuciones de "dinero blando" a los partidos nacionales y restringe la publicidad para candidatos específicos por grupos externos. Desde 1989, el gigante energético Enron había aportado dinero blando por un total USD 5,95 millones (74% de los cuales fueron a los Republicanos) y disfrutaba de una estrecha conexión con los formuladores de política en la administración Bush.

Se esgrimieron acusaciones de patronazgo y favoritismo en la adjudicación de contratos durante el gobierno Liberal del Primer Ministro de **Canadá** Jean Chrétien. Muchas de las acusaciones involucraban pequeñas sumas de dinero, como el subsidio de CAD 37.000 (USD 24.000) adjudicado sin concurso por el Ministro de Defensa Art Eggleton a una ex amante. Sin embargo, los críticos señalan que estas pequeñas sumas eran parte de un patrón en el cual los ministros otorgaban los contratos a amigos o compañías que habían hecho donaciones al Partido Liberal. La controvertida suma de CAD \$1,6 millón (USD 1,1 millón) en concepto de contratos adjudicados a Groupaction Marketing, que había contribuido CAD \$70.000 (USD 46.000) al Partido Liberal, impulsó al auditor general y a la Policía Montada Real Canadiense a iniciar una investigación.

Los escándalos de corrupción también salpicaron a algunos políticos locales en **Estados Unidos**. El Congresista James A. Traficant de Youngstown, Ohio, fue declarado culpable en Abril de 2002 de 10 cargos federales por soborno y estafa, y Vincent Cianci Jr., alcalde de Providence, Rhode Island, fue condenado por el delito de asociación ilícita para cometer estafas en Julio. Aunque todavía populares en sus distrito, ambos intentaron postularse a la reelección hasta que el proceso de apelación se agotara. El 24 de Julio, tras una moción de la Comisión de Ética de la Cámara Baja, Traficant fue expulsado del Congreso por 420 votos a uno y comenzó su sentencia de ocho años de prisión dos semanas después.

Un delator corporativo contribuyó a revelar el sistema contable fraudulento de **Enron**, que se apoyaba en socios privados y subsidiarias offshore para mantener el perfil de deuda de la corporación en bajos niveles y elevar el precio de las acciones en una fullería financiera. Luego, comenzaron a surgir otras revelaciones de contabilidad errónea de Adelphia Communications, Global Crossing, Halliburton, WorldCom y Xerox, al mismo tiempo que se presentaron acusaciones de evasión impositiva y especulación contra los CEO de Tyco International e ImClone Systems. En un intento por recuperar la confianza, el Congreso y la Casa Blanca se apuraron a sancionar un proyecto de ley de fraude corporativo en Julio de 2002. Elogiada como una reestructuración significativa de las regulaciones comerciales de **Estados Unidos**, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 establece nuevas penalidades para el fraude corporativo y exige que el directorio y los CEO asuman la responsabilidad directa de la veracidad de los estados contables.

La Asociación Canadiense de Periodistas entregó su segundo premio anual "Código de Silencio" al ministro federal de justicia por investirse de la facultad, en virtud de la Ley C-36, de abrogar la Ley de Acceso a la Información. El premio reconoce al departamento de gobierno más proclive a la ocultación en Canadá. La propuesta ley antiterrorismo del 15 de Octubre de 2001 plantea amenazas al acceso público a la información de gobierno. Si fuera sancionada, la Ley autorizaría al ministro de justicia a suspender las garantías otorgadas en virtud de la Ley de Acceso a la Información en aras de la seguridad o defensa nacional y las relaciones internacionales. La Ley de Acceso a la Información ya contempla excepciones para estas categorías de información, aunque somete las decisiones a la supervisión independiente del comisionado de información y los tribunales federales. La nueva legislación propone cambiar el contenido de la ley aislando las decisiones del ministro de justicia de la revisión independiente.

Centroamérica, México y el Caribe

El Grupo Oaxaca, un equipo de periodistas, abogados y representantes del mundo académico y de ONG, resolvió formar una comisión técnica que bregaría por la sanción de legislación en pro del **acceso a la información en México**. En Octubre de 2001, el grupo presentó al congreso mexicano su propio proyecto de ley con la intención de garantizar a los ciudadanos el acceso a los documentos de gobierno, la primera vez que un grupo de la sociedad civil haya elevado un proyecto a la legislatura. La redacción de la ley,

entonces, fue encargada a la agencia anticorrupción del gobierno, SECODAM, pero fuentes revelaron que el anteproyecto de SECODAM estaba plagado de exoneraciones y subterfugios. La responsabilidad, por ende, se transfirió a la Secretaría de Gobernación, y las propuestas, entonces, se convirtieron en el tema de discusión de los legisladores durante un mes. Ambas cámaras de la legislatura finalmente transigieron y aprobaron el proyecto de ley en Abril de 2002.

Transparencia **Costa Rica** lanzó un programa para monitorear el financiamiento de campañas durante las elecciones presidenciales en Febrero de 2002. En Agosto 2001, se invitó a los ocho candidatos presidenciales a suscribir un acuerdo de transparencia en virtud del cual convenían suministrar información detallada del financiamiento de sus respectivas campañas electorales. Un candidato se negó a firmar el acuerdo y, posteriormente, intentó desprestigiar los procedimientos propuestos, que incluían el monitoreo independiente de los gastos de los candidatos y las contribuciones realizadas a su campaña. El programa de monitoreo reveló que los partidos habían subestimado sus gastos y que no habían declarado todas las contribuciones recibidas. También reveló que uno de los partidos políticos mayoritarios había declarado gastos 22 veces superiores a las contribuciones recibidas durante el mismo periodo. El partido se vio obligado a corregir las cifras públicamente y a ofrecer una explicación por la diferencia. El candidato que al principio se había negado a suscribir el acuerdo de transparencia accedió a cooperar durante la segunda ronda. El monitoreo de los gastos de publicidad durante esta ronda permitió identificar que, en consecuencia, las erogaciones en este rubro se habían reducido significativamente.

En **Panamá**, se aprobó en Diciembre de 2001 la Ley de Transparencia en la Administración Pública, que acuerda a los ciudadanos libre acceso a la información sobre las actividades gubernamentales. Unos pocos días después de sancionada la legislación, el partido opositor denunció al gobierno por negarse a divulgar una copia completa del Arreglo Complementario 2002, firmado con los Estados Unidos y que se refiere a las actividades de patrulla conjunta para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes. En Enero de 2002, la Presidente Mireya Moscoso oficialmente aprobó y firmó la ley de libertad de información. La ley contempla la penalización de los funcionarios que no acaten las disposiciones de la misma.

No hay duda de que **México** lidera la región en la implementación de medidas anticorrupción. La legislación sancionada durante el último año pudo penetrar considerablemente el secreto bancario. Otras leyes comprenden la ejecución de medidas cautelares de incautación en conexión con funcionarios sospechados de participar en redes de corrupción; también se tomaron los recaudos necesarios para investigar las cuentas o bienes registrados a nombre de parientes o terceros. La nueva ley que rige las responsabilidades administrativas de los servidores públicos fortalece el programa nacional de México para combatir la corrupción y prorroga los plazos impuestos por la ley de prescripción de causas para castigar actos de corrupción. La misma importancia reviste una nueva ley federal sobre el acceso a la información de dominio público y la introducción de los sistemas de e-government Tramitanet y Declaranet. El Banco Mundial sostiene que la corrupción se lleva alrededor del 9 por ciento del Producto Interno Bruto de México, lo que es superior al gasto total en concepto de educación en ese país.

En **Honduras**, el ex presidente Rafael Callejas debe responder a acusaciones que sostienen que transfirió USD 11 millones a una cuenta secreta de la presidencia durante su mandato. El ex presidente Leonel Fernández de la **República Dominicana** fue investigado por corrupción durante su gobierno de agosto de 1996 a agosto de 2002. Fue interrogado acerca del manejo irregular de USD 84,3 millones de una cuenta especial; finalmente, no se formuló ninguna acusación formal en su contra, a pesar de que varios de sus funcionarios tuvieron que comparecer ante los tribunales. En Abril de 2002, un juez presentó cargos contra el ex presidente **nicaragüense** Arnoldo Alemán y contra funcionarios de su gobierno por fraude, malversación y uso indebido de fondos públicos en conexión con un contrato televisivo.

Sudamérica

Roseana Sarney, hija del ex presidente de **Brasil** José Sarney, fue candidata presidencial en las elecciones de 2002. Sin embargo, su reputación sufrió un daño irreparable cuando su propio canal de TV mostró a la policía federal en un allanamiento que descubriera 1.300.000 reales (USD 400.000) en efectivo en una de sus empresas. Su marido y socio admitió que el dinero estaba destinado a apoyar su campaña, en violación de las reglas de financiamiento de campañas. El escándalo que siguió obligó a Sarney a abandonar la carrera presidencial en Abril de 2002.

Un estudio del Banco Mundial dado a conocer en Febrero de 2002 reveló que el 50 por ciento de los contratos por compras estatales en **Colombia** contiene algún elemento de soborno. Otro informe del Banco Mundial estima que el costo de la corrupción en Colombia asciende a USD 2.600 millones por año, el equivalente al 60 por ciento de la deuda del país.

Argentina sigue siendo golpeada duramente por las denuncias de abuso durante el gobierno de Carlos Menem quien debió cumplir un arresto domiciliario durante seis meses en el año 2001 por imputaciones de contrabando de armas y lavado de dinero, aunque fue liberado después de una controvertida resolución del tribunal superior. También se dispuso el procesamiento y prisión preventiva del ex ministro de economía Domingo Cavallo como consecuencia de este escándalo, que involucró el desvío ilegal de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia. Se cree que Cavallo firmó decretos que ordenaban la venta de armas a Panamá y Venezuela y que se desviaron ilegalmente a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. La más reciente acusación contra Menem es que habría recibido USD 10 millones de Irán para cubrir a los terroristas de ese país que habrían participado en el atentado contra la mutual israelí en Buenos Aires en Julio de 1994.

Siete meses antes de que **Brasil** ganara su quinto título mundial de fútbol en Julio de 2002, se publicó un informe de 1.600 páginas como resultado de una investigación del congreso sobre supuesta mala administración y corrupción que acusaba a Ricardo Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. El informe recomendaba el procesamiento de Teixeira - que también es miembro del comité ejecutivo de la FIFA- por la administración fraudulenta de la confederación de fútbol. Lo culpó por "la manera irracional y fraudulenta en que se administraron los fondos de la confederación para beneficiar a algunas personas". Bajo la dirección de Teixeira, la confederación acumuló deudas por más de USD 10 millones entre 1995 y 2000, parte de la cual se originó en "gastos inadmisibles" como alquiler de limusinas a un valor de USD 2.000 por día en Nueva York

Poder Ciudadano lanzó un informe después de siete meses de monitorear al Senado **argentino** que describió a la cámara alta como una "institución capturada", lo que confirma que muchas de las reglas relacionadas con la transparencia no se aplican en la práctica. Poder Ciudadano también dirige el proyecto de "Candidatos Visibles", que ofrece un perfil completo de los candidatos a las elecciones parlamentarias y de sus gastos de campaña.

El Pacífico

Surgió evidencia que prueba que el crimen organizado de Rusia usó al Sinex Bank de **Nauru**, uno de los bancos offshore registrados de la isla, para lavar un total de USD 3.000 millones a través del Banco de Nueva York. El banco central de Rusia señaló que se habían desviado más de USD 70.000 millones a través de 400 bancos offshore de Nauru, todos registrados en una única casilla postal de propiedad de la Nauru Agency Corporation controlada por el estado. La enormidad del ardid sobresale aun más cuando se lo compara con el ingreso total de Rusia en concepto de exportaciones, que ascendió a USD 74.000 millones en 2001. El Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF) sobre Lavado de Dinero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció en Diciembre de 2001 que, por primera vez en 12 años de existencia, tomaría medidas contra un estado soberano, y emitió un ultimátum: la isla estado debía efectuar cambios jurídicos a fin de regular sus bancos offshore, o, de lo contrario, debería soportar las sanciones que le cabrían.

Se estableció una comisión real en **Australia** Occidental en Diciembre de 2001 para investigar acusaciones de corrupción policial. La investigación que duró 18 meses se inició en Marzo de 2002 con un ofrecimiento de amnistía para todos los oficiales de policía en servicio o retirados que realizaran una confesión completa del conocimiento que pudieran tener de actividades policiales corruptas y delictivas antes del 31 de Mayo de 2002 y estuvieran dispuestos a prestar testimonio. La corrupción policial será un tema importante en las elecciones estatales de 2002. Los expertos dicen que una de las causas de la extensión de la corrupción policial es la inherente "cultura policial" que alienta estas conductas indebidas. El Ministro de la Corte James Wood, que condujera la Comisión Real Wood, dice que la policía aprende desde el comienzo que deben lealtad a sus compañeros antes que al servicio.

En las semanas anteriores a las elecciones de Junio de 2002, los periódicos de **Papua Nueva Guinea** publicaron avisos de páginas enteras alertando a los votantes sobre la necesidad de analizar bien a cada candidato y de refrenar la venta de votos. Lanzada en 2002, esta campaña fue la respuesta a una ola de escándalos de corrupción, entre ellos, uno que involucró sobornos, extorsión y malversación del Fondo de Previsión Nacional. El Consejo de Medios se preocupó especialmente por la cobertura del ex presidente de la institución de ahorro, quien fuera acusado de malversar 2,7 millones de kinas (alrededor de USD 750.000) de la caja de jubilación de los empleados. Dado que nadie más implicado en el escándalo ha sido procesado desde que se lanzara la investigación hace más de dos años, el grupo instó a la policía y a la fiscalía a avanzar rápidamente con sus presentaciones. El gobernador general en funciones y presidente de la cámara baja acogió con beneplácito la campaña de los medios que demandaban nuevas leyes para nombrar fiscales independientes que pudieran ahondar más en los casos de corrupción. Junto a Transparencia Internacional PNG y la Comisión del Defensor del Pueblo, el Consejo de Medios ha instalado una línea directa través de la cual los ciudadanos pueden denunciar casos sospechosos de corrupción directamente a los medios.

Asia Oriental

Desde que se promulgó la Ley de Difusión de Información en **Japón** en Abril de 2001, se les garantiza a los ciudadanos el derecho de acceso a la información oficial que obra en poder de las dependencias administrativas y la posibilidad de apelar a la Junta de Revisión de la Difusión de Información cuando el gobierno decida no divulgar cierta información. Las disposiciones han permitido a los grupos cívicos exponer varios casos de corrupción. Uno salió a la luz cuando el periódico *Asahi Shimbun* solicitó los registros de los gastos *watashikiri* para las oficinas postales. El presupuesto *watashikiri* se asigna generalmente como suma única que no requiere estricta contabilidad. Cuando se publicaron los detalles del uso de los gastos *watashikiri* en Diciembre de 2001, saltaron varios ejemplos de contabilidad fraudulenta. Los registros de una oficina postal revelaron que las facturas habían sido emitidas por una compañía que no existía. En otro caso, se descubrió que las oficinas postales en el distrito de Kyusyu habían traído mercaderías en promoción de una corporación que efectivamente había sido de propiedad de los directores del correo durante más de 70 años. Se estima que la corporación había ganado casi USD 9 millones por año. A causa de estas revelaciones, los inspectores internos del servicio postal lanzaron una investigación que derivó en la sanción de varios directores y la abolición del sistema de gastos *watashikiri*.

Cuando se publicó el Índice de Fuentes de Soborno de Transparencia Internacional en Mayo de 2002, los empresarios de **Taiwan** se encontraban entre las fuentes más frecuentes de soborno de los países en desarrollo. A causa de ello, el ministro de justicia anunció su intención de prohibir el cohecho de funcionarios extranjeros. Se redactó un proyecto de ley en Julio de 2002.

En Enero de 2002, el fiscal general de **Corea del Sur** renunció tras el arresto de su hermano sospechoso de aceptar sobornos. Horas después, el Presidente Kim Dae Jung se disculpó en público por la corrupción existente en su administración y prometió priorizar la erradicación de la corrupción durante el último año de su mandato. Pero en Mayo y Junio de 2002, dos de los hijos del presidente fueron arrestados por supuestamente aceptar sobornos. El Presidente Kim renunció a su partido en Mayo de 2002, una vez más sintiendo la necesidad de disculparse por los escándalos en su administración. En Junio de 2002, los fiscales alegaron que uno de los hijos del presidente, Kim Hong-up, había aceptado USD 820.000 de una constructora, entre otros sobornos. Fue posteriormente sentenciado a tres años y medio de prisión.

La terminación del proyecto de la presa Three Gorges, el proyecto de ingeniería más grande de **China** desde la construcción de la Gran Muralla, está programado para el año 2009. El proyecto tiene un presupuesto de alrededor de USD 24.000 millones, lo que da lugar a maniobras para el enriquecimiento personal de los cuadros jerárquicos cercanos a la obra. En el año 2000, Beijing admitió que alrededor de USD 58 millones de los USD 2.100 millones asignados al reasentamiento ya habían sido utilizados indebidamente. Hasta ahora, por lo menos 100 funcionarios han sido sancionados por el Partido Comunista por malversación. Supuestamente, los funcionarios están explotando los contratos por miles de millones de dólares tanto como pueden. Las acusaciones van desde aceptación de sobornos, aumento del costo real de la reubicación, invento de personas que habían de reasentarse y sustracción del

presupuesto para reasentamiento del gobierno central. Los funcionarios locales son acusados de pagar menos que el dinero estipulado por las regulaciones gubernamentales a aquellos expropiados.

El gobierno de **China** utiliza a los medios como un arma en su ejército anticorrupción. Un unitario televisivo, *Agujero Negro*, puesto en el aire por primera vez en Diciembre de 2001, se colocó a la cabeza del ranking de televidentes en Beijing. En Marzo de 2002, un nuevo programa televisivo, *Los Más Buscados en China: Funcionarios Corruptos*, se televisó en 60 estaciones locales. Este minidocumental, producido por la Procuración Suprema del Pueblo, el principal organismo anticorrupción del país, nombra y avergüenza a los funcionarios o empleados públicos fugitivos sospechosos de corrupción. Pero los medios en China no pueden investigar casos de corrupción por su cuenta, especialmente si funcionarios poderosos están implicados. Cuando el periodista Jiang Weiping descubrió varios escándalos de corrupción que involucraban a funcionarios de alto rango, fue acusado formalmente en Setiembre de 2001 de "revelar secretos de estado" y fue sentenciado a nueve años de prisión después de un juicio secreto.

Corea del Sur introdujo una ley anticorrupción en Enero de 2002 que contempla severas penas para los funcionarios corruptos, inclusive condenas de prisión de hasta 10 años, multas de hasta 50 millones de won (USD 40.000) e inhabilitación para ejercer cargos públicos o privados durante cinco años. La ley también estableció una comisión anticorrupción, con un mandato específico para investigar casos relacionados con funcionarios de alto rango. En Abril de 2002, el gobierno de Corea del Sur anunció que trabajaría más estrechamente con los actores no gubernamentales en la lucha contra la corrupción. La dependencia gubernamental de contrataciones públicas anunció la introducción de una defensoría del pueblo y una "comisión de contrataciones públicas honestas" en un intento por romper los vínculos entre el gobierno y sus contratistas. La nueva oficina nombrará a miembros de organizaciones cívicas, profesores y técnicos para ocupar el cargo de defensores del pueblo para monitorear los procesos de licitación y adjudicación de contratos a fin de aumentar la transparencia.

Sudeste Asiático

En Marzo de 2002, el presidente de **Indonesia** Megawati Sukarnoputri ordenó el arresto y enjuiciamiento del presidente del parlamento, Akbar Tanjung, por corrupción. El hijo del ex presidente Suharto, Tommy Suharto, también fue declarado culpable del asesinato de un juez que lo condenara por delitos de corrupción. También en marzo, un tribunal de Jakarta declaró al gobernador del Banco Central, Syahril Sabirin, culpable de corrupción y lo condenó a tres años de prisión.

En **Tailandia**, la Comisión Nacional Contra la Corrupción (NCCC) sacudió al gobierno al acusar formalmente al Primer Ministro Thaksin Shinawatra por ocultación indebida de bienes. Sin embargo, el tribunal constitucional derogó el veredicto de culpabilidad de la NCCC por razones que no se dieron a conocer. Si bien la absolución del Primer Ministro desilusionó a muchos observadores, se elogió a la relativamente nueva NCCC por demostrar independencia ante la presión política.

Los organismos anticorrupción, que han demostrado tener éxito en **Singapore** y **Hong Kong**, enfrentaron problemas en otras partes. Algunos de ellos mismos se perciben como corruptos. En Febrero de 2002, el defensor del pueblo de Filipinas tuvo que enfrentar un pedido de juicio político sin precedente por acusaciones de corrupción. A pesar de que no se hizo lugar al pedido, el incidente sembró dudas acerca de la credibilidad y capacidad de esa dependencia de controlar la corrupción.

Una encuesta realizada por Social Weather Stations a fines de 2001 reveló que los empresarios en las **Filipinas** estaban dispuestos a destinar un dos por ciento de sus ingresos netos corporativos a la financiación de programas anticorrupción. Habían estimado que evitar la corrupción redundaría en un aumento del cinco por ciento en sus ingresos netos y en un ahorro del 10 por ciento en los contratos, al tiempo que el gobierno ahorraría del 15 al 20 por ciento.

Sur de Asia

La carrera del ministro de defensa de la **India** George Fernandes, quien había renunciado brevemente en Marzo de 2001 después de que Tehelka.com filmara subrepticamente a funcionarios exigiendo el pago de sobornos por la venta de armas, se vio envuelta en una baraúnda peor en Diciembre de 2001 cuando el

"Coffin-gate" llegó a las primeras planas. El fraude involucraba a funcionarios en su ministerio que habían autorizado pagos de USD 2.500 por cajón para los ciudadanos indios caídos durante la Guerra de Kargil en 1999, cuando el precio real era de USD 172 por ataúd. La Comisión Venkataswamy, establecida para investigar sobornos en el ministerio de defensa inmediatamente después de las revelaciones de Tehelka.com, debía presentar sus conclusiones en cuatro meses, pero no lo hizo. Mientras tanto, los auspiciantes financieros de Tehelka.com fueron hostigados, y hubo un intento de vincularlos a una conspiración financiera más amplia para manipular fraudulentamente los precios en el mercado de valores.

En **Bangladesh**, el nuevo gobierno liderado por el BNP no escatimó esfuerzos en exponer las inconductas de sus predecesores. Un documento publicado en Enero de 2002 presentó un total de 30 casos importantes de supuesta corrupción contra la Liga Awami, acusándola de robar USD 126 millones mientras estaba en el poder. El documento también acusó al ex premier Sheikh Hasina de hacerse de USD 123 millones de la venta de ocho MiG-29 rusos y de otros USD 3 millones gracias al empleo de consultores extranjeros en un ardid para la promoción de las exportaciones. El gobierno liderado por el BNP reafirmó una norma común en la política de Bangladesh: ningún político en funciones ha enjuiciado exitosamente por corrupción. Las causas pendientes contra los políticos del BNP fueron retiradas abruptamente. Las investigaciones de corrupción enunciadas en el documento blanco omitieron conspicuamente irregularidades cometidas durante el último gobierno de ese partido.

El interés político fue la fuerza motora detrás del auge anticorrupción en **Paquistán**, un país dominado por una elite militar dispuesta a retratar a los administradores civiles como corruptos y no confiables. Sin embargo, ex oficiales, burócratas y empresarios dispuestos a cooperar con el régimen del Presidente General Perez Musharraf pudieron escapar con leves sentencias, especialmente si eran lo suficientemente ricos para devolver las ganancias malhabidas. El almirante Mansur ul-Haq evitó la cárcel devolviendo a la Dirección Nacional de Rendición de Cuentas de Paquistán los USD 7,5 millones que él estimaba había obtenido en concepto de sobornos en transacciones de compras de armas.

En la ciudad de Bangalore, en el sur de **India**, una encuesta independiente sobre la calidad de los servicios de maternidad para los pobres en las áreas urbanas realizada por la ONG Public Affairs Centre reveló que los pobres son extorsionados a pagar grandes sumas de dinero cuando interactúan con los centros de maternidad. El paciente promedio en un pabellón de maternidad dirigido por la corporación municipal pago 1.089 rupias (alrededor de USD 22) en concepto de sobornos para recibir suficiente atención médica. Otro 61% de los consultados dijo que se los obligó a pagar los medicamentos, a pesar de que la política pública claramente estipula que los medicamentos deben ser entregados gratuitamente.

En **Paquistán**, el Presidente Musharraf emitió una clara señal de su determinación de luchar contra la corrupción, lanzando una serie de reformas institucionales significativas, inclusive la reforma del servicio civil, un programa de "acceso a la justicia" y la separación de funciones contables de la oficina del auditor general. El gobierno también prometió establecer una agencia independiente anticorrupción para Octubre de 2002 que integraría a la NAB, la Agencia Federal de Investigaciones y la Oficina Anticorrupción. Durante una serie de reuniones con el gobierno paquistaní en Abril de 2002, Transparency International hizo un llamamiento hacia la introducción de legislación sobre la libertad de información, un código de conducta para los funcionarios públicos, una reestructuración del sistema de contrataciones públicas y para que las fuerzas armadas y el poder judicial queden dentro de la órbita de la NAB.

Nepal también propuso una gama de leyes anticorrupción en 2002, inclusive la Ley de Control de la Corrupción, la Ley de Creación de la Comisión para la Investigación de Abusos de Autoridad, la Ley de Tribunales Especiales, la Ley de Procedimiento/Reglamentación de Juicio Político y la Ley de Administración de Partidos Políticos. Los casos prominentes de corrupción durante el año en revisión incluyeron casos de contabilidad fraudulenta, licitaciones ilegales, fraudes bancarios y la evasión sistemática de impuestos a las ventas, a la propiedad y a las ganancias.

La red de políticos y empresarios de **Sri Lanka** atrajo atención en Noviembre de 2001 después de que se revelara que 15 millones de rupias (alrededor de USD 150.000) destinados al pago de intereses sobre un préstamo de £500,000 (USD 780.000) de la sucursal de Londres del Bank of Ceylon de propiedad del estado fueron desviados hacia las arcas del empresario Ronnie Peiris, un estrecho colaborador del Presidente Chandrika Kumaratunga.

Mancomunidad de Estados Independientes

El semanario independiente de **Kazajistán** *Nachnem s Ponedelnika* es conocido por informar acabadamente sobre la implicación de funcionarios del gobierno en el comercio del petróleo y otros sectores. Desde 1998 hasta 2001, el semanario fue demandado 17 veces por difamación, principalmente por funcionarios o ejecutivos de empresas con vínculos estrechos con el gobierno. En tres casos, se declaró culpable del delito de cometer injurias y se lo multó por un total de 25.935.000 tenge (alrededor de USD 180.000). Dado que la ley de calumnias de Kazajistán no admite que la verdad sea causal de exención, *Nachnem s Ponedelnika* fue condenado a pagar una multa por dañar la reputación de funcionarios públicos, sin debida consideración de las posibles pruebas de participación de los mismos en casos de soborno.

A pesar de la aprobación de un número de medidas anticorrupción en **Georgia**, inclusive el establecimiento por decreto presidencial de un consejo anticorrupción en Julio de 2001, las medidas tomadas hasta ahora parecen carecer de sustento. Después de que el FMI señalara los problemas que acarrea una "administración débil y la corrupción generalizada" en un reciente informe, Georgia estableció una unidad de lucha contra el fraude en el cobro del IVA y sancionó legislación para fortalecer el sistema de reembolso del IVA. El Presidente Eduard Shevardnadze también está impulsando una reforma ejecutiva, en colaboración con el consejo anticorrupción; la primera fase involucra desafuera a los parlamentarios para que puedan ser enjuiciados. En Marzo de 2002, el presidente demandó leyes más duras contra la corrupción, la evasión impositiva y el uso indebido de las propiedades del estado.

En el verano de 2001, el presidente de **Turkmenistán** Saparmurat Niyazov anunció una serie de arrestos y exoneraciones de alto perfil por acusaciones de corrupción. Sin embargo, era un rasgo típico de la política de Turkmenistan que se elevaran acusaciones sólo cuando el funcionario comprometido desertaba a la posición. El ex presidente del Banco Central y Vice Primer Ministro Khudaiberdy Orazov fue acusado de malversar parte de un préstamo de 1997 del Credit Suisse y del Deutsche Bank por USD 120 millones otorgado para el sector agrícola en marzo de 2002 - un mes después de que formalmente se uniera a la oposición.

En Octubre de 2001, **Ucrania** sancionó un decreto "Sobre la Garantía de Implementación de los Derechos de los Ciudadanos, Principios de la Sociedad Democrática, Apertura y Transparencia del Proceso Electoral 2002". Pero una ley sancionada al mismo tiempo restringió la cobertura por parte de la prensa nacional y extranjera de las elecciones celebradas en Marzo de 2002. Los votantes no tuvieron acceso a información imparcial y equilibrada debido al sesgo contra la oposición de las principales estaciones de TV.

De acuerdo con un estudio del grupo INDEM (Información para la Democracia), los empresarios en **Rusia** pagan más de USD 30.000 millones por año en concepto de sobornos, una suma bastante equivalente a los ingresos del presupuesto federal para 2002 y alrededor del 12% del producto bruto interno. Aproximadamente el 90% de los sobornos se pagan por "servicios de corrupción" asociados con licencias y cupos de exportación, transacciones relacionadas con el presupuesto del estado, transferencias impositivas, derechos aduaneros, acuerdos de privatización y pago de intereses de la deuda con el presupuesto federal.

La firma de corretaje de Moscú Troika Dialog estima que la reputación de **Rusia** como lugar donde los CEO violan rutinariamente los derechos de los accionistas minoritarios disminuye el valor del mercado de valores en alrededor de USD 45.000 millones por año. Toda mejora en las prácticas de conducción corporativa podría atraer un adicional de USD 10.000 millones por año en Inversión Directa Extranjera de acuerdo con PricewaterhouseCoopers.

Majid Abduraimov, periodista del sur de **Uzbekistán** deberá pasar varios años en prisión por haber sido condenado por los delitos de soborno y extorsión después de escribir una serie de artículos sobre la corrupción y abuso de poder entre funcionarios de jerarquía en la municipalidad de Boisun, en la región de Surkhandarya. Los activistas de derechos humanos dicen que cinco reporteros están detrás de rejas actualmente por haberseles imputado delitos que nunca cometieron. El periodista y activista de derechos

humanos de **Kyrgyz** Samagan Orozaliev fue condenado a nueve años de prisión en Noviembre de 2001 después de ser declarado culpable de extorsión, falsificación de documentos, posesión ilegal de armas y resistencia a la autoridad pública. Orozaliev fue arrestado mientras preparaba un documental sobre la corrupción oficial.

Europa Central, Oriental y los Estados Bálticos

En 2001, **Hungría** introdujo la obligatoriedad de que todos los empleados públicos deban presentar sus declaraciones de bienes. En Julio de 2001 y Marzo de 2002, Eslovaquia y la República Checa adoptaron leyes para la administración pública que obligaban a los empleados públicos a declarar sus propiedades. El parlamento de Hungría adoptó una ley de responsabilidad penal corporativa en Diciembre de 2001. El código penal fue enmendado para mejorar los instrumentos disponibles en la lucha contra la corrupción y para elevar las penas para los actos de corrupción, al tiempo que se ampliaron las facultades de investigación de la fiscalía. La República Checa y Eslovaquia introdujeron nuevas leyes sobre unidades de auditoría intra-gubernamentales independientes en Agosto y Octubre de 2001.

Se elevaron acusaciones de corrupción contra la empresa de energía de EE.UU. Williams International y sus competidores rusos Yukos y LUKOIL mientras se disputaban la petrolera de **Lituania**, Mazeikiu. Poco tiempo antes, el alcalde de Vilnius había acusado a un miembro del parlamento de engañar a la compañía energética francesa Dalkia, y de exigir dinero a cambio de protección.

En Febrero de 2002, se acusó a empleados del servicio de ambulancias Lodz de **Polonia** no sólo de aceptar comisiones de empresas funerarias a cambio de información sobre la muerte de los pacientes y sino también de asesinar a algunos pacientes para obtener una ganancia. Las acusaciones eran sólo la punta del iceberg, y los médicos y los dueños de las funerarias también fueron acusados de aceptar o pagar sobornos.

En 2001-02, varias ONG de **Eslovaquia** establecieron la Alianza "Detengamos los Conflictos de Intereses" a fin de enmendar la legislación existente de prevención de conflictos de intereses que es, en su mayoría, ineficaz. La alianza quería aumentar el número de empleados públicos alcanzados por la legislación; formular obligaciones y límites más precisos con respecto a los contratos de trabajo y los ingresos adicionales; imponer la obligatoriedad de presentar declaraciones de bienes públicamente incluso para los parientes cercanos; y mejorar la eficacia de los procedimientos y sanciones en caso de conflicto de intereses.

En una asociación única entre el gobierno y una ONG, el capítulo de TI en **Latvia**, Delna, fue invitado a monitorear el proceso de licitación de una importante privatización. A pesar de que la licitación para privatizar la Empresa Naviera de Latvia fracasó, la cooperación entre la ONG y la dependencia encargada de la privatización sentó un precedente en el campo de la prevención del uso de influencias en el proceso de toma de decisiones.

Sudeste de Europa

El gobierno de la **República Federal de Yugoslavia** impuso un impuesto a las empresas que recibieron favores de la administración de Milosevic. La comisión a cargo de investigar los abusos regularmente publica listas de aquellos que obtienen ganancias extra - 271 personas en Febrero de 2002 - y garantiza que se recaude el impuesto correspondiente. En Setiembre de 2001, la RFY también promulgó legislación para penalizar el lavado de dinero y exigir a los bancos e instituciones financieras que informen todas las transacciones que excedan los 600.000 dinares (alrededor de USD 9.500) a partir de julio de 2002. Serbia también formó 26 unidades de lucha anticorrupción para recabar información a través de líneas telefónicas dedicadas. De acuerdo con los hallazgos de los equipos, el ministerio de asuntos internos y la aduana son las instituciones más corruptas de **Serbia**.

Las nuevas reglamentaciones sobre financiamiento de campañas y donaciones políticas forman parte de un nuevo plan de acción de gobierno en **Turquía**, que el Fondo Monetario Internacional convino financiar con fondos de un préstamo de USD 16.300 millones en Febrero de 2002. El sistema de adjudicación de contratos se reformará a partir de Enero de 2003 en virtud de una nueva ley de contrataciones públicas

que constituía una precondition para el préstamo. Los contratistas turcos tradicionalmente tuvieron que pagar hasta el 15 por ciento del valor de los contratos del estado a modo de "contribución de campaña", de acuerdo con un informe del Banco Mundial en 2001.

En **Albania**, se establecieron unidades anticorrupción en los ministerios de orden público, finanzas, justicia y en la fiscalía, con resultados variados. En Junio de 2002, el gobierno redactó un proyecto de ley anticorrupción que conducirá a la creación de un organismo especial de supervisión encargado de investigar los bienes de alrededor de 5.000 funcionarios de alto y mediano rango. Los miembros del organismo, que serán elegidos por el parlamento, tendrán amplia jurisdicción y acceso a los datos de bancos y empresas privadas. Y se pedirá el procesamiento de aquellos funcionarios que hayan mentido acerca de las propiedades que les pertenecen.

En Febrero de 2002, **Bosnia y Herzegovina** estableció un grupo de trabajo para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, con la participación de ministerios y representantes de Interpol, el poder judicial y la policía. Un mes después, en cooperación con el Banco Mundial y la Oficina del Alto Representante, el Consejo de Bosnia y Herzegovina propuso un plan de acción nacional anticorrupción. Al mismo tiempo, sin embargo, se desató un gran escándalo cuando el ministro bosnio-serbio de finanzas renunció por un caso de fraude aduanero que despojó al presupuesto de USD 15.000 millones.

En **Albania**, donde el gobierno no logró despenalizar la calumnia, los periodistas que investigan casos de corrupción corren riesgos para su seguridad personal - arresto arbitrario, graves golpizas e intimidación - y se les niega un juicio justo en las causas que se les sigue por difamación. En Noviembre de 2001, el editor del diario independiente *Koha Jone* de Tirana fue atacado y amenazado después de que publicara alegaciones de que un hotel de Duresse había sido construido ilegalmente. Dado que el cumplimiento de la legislación de libertad de información existente es deficiente, los periodistas deben sobornar constantemente a los empleados gubernamentales para obtener documentos oficiales.

La corrupción le cuesta a **Rumania** miles de millones de dólares por año, de acuerdo con un informe de PricewaterhouseCoopers que sostiene que la inversión directa extranjera de USD 1.300 millones en 2001 fue un tercio de lo que podría atraer el país.

Oriente Medio y Norte de África

Los bancos estatales y las instituciones financieras de la región en repetidas ocasiones fueron presa de la corrupción en 2001-02. En Febrero de 2002, se descubrió una estafa por USD 150–168 millones en el sistema bancario de **Jordania**, que supuestamente involucraba a 72 prominentes empresarios y funcionarios públicos, entre ellos, un ex ministro de agricultura, un senador y el hijo de un primer ministro. Se acusa a los empresarios de haber obtenido préstamos, en colusión con funcionarios públicos, de bancos privados sin aval con la promesa de suministrar servicios de tecnología informática a los servicios de inteligencia del país.

De acuerdo con un artículo en el *Daily Star*, el periódico de mayor circulación en inglés del **Líbano**, para renovar el registro de conducir se debía pagar un soborno de USD 7, para patentar el automóvil, USD 27 y para renovar el pasaporte USD 70. El *baksheesh* para obtener un permiso de construcción para una casa de familia puede exceder los USD 2.000. La Asociación de Transparencia Libanesa ha publicado un cuadernillo que simplifica los procedimientos necesarios para obtener un permiso de construcción y, además, describe los documentos, tasas y tiempo promedio que lleva el trámite.

En **Israel**, el escuadrón de estafas de la policía interrogó al Primer Ministro Ariel Sharon y a su hijo, Omri, sobre si habían utilizado compañías ficticias para transferir USD1,3 millón en donaciones ilegales para las elecciones para renovación de autoridades del Partido Likud en 1999 y para dos elecciones ministeriales dos años más tarde. El ex primer ministro Ehud Barak fue exonerado de acusaciones similares en Mayo de 2002, a pesar de que la policía presentó cargos contra cuatro de sus colaboradores por desviar fondos ilegales hacia entidades de caridad falsas durante las elecciones de 1999.

Los empresarios de **Marruecos** consultados por Transparency Maroc dijeron que la corrupción era el segundo desafío más importante después de los altos impuestos. Los empresarios entrevistados por el

Banco Mundial en Palestina citaron la corrupción como la segunda gran limitación al crecimiento después de la "inestabilidad política y la incertidumbre".

En **Arabia Saudita**, el escritor Abdul Mohsen Musalam fue encarcelado en Marzo de 2002 después de publicar un poema en el periódico *Al-Madina* el 10 de Marzo de 2001. El poema de Musalam, "Los Corruptos en la Tierra", acusaba a varios jueces de cohecho. El Ministro del Interior Saudí, el Príncipe Nayef, ordenó despedir al jefe de redacción de *Al-Madina* por permitir que se publicara el poema.

África Occidental

Las organizaciones cívicas en **Senegal** criticaron el hecho de que el Presidente Abdoulaye Wade se negara a derogar el Decreto No. 97-632 a pesar de las repetidas objeciones presentadas por Foro Civil (el capítulo nacional de Transparency International en Senegal) y de la condenación del decreto por su propio partido cuando era oposición. El decreto de 1997 permite que los contratos de construcción de obras públicas sean adjudicados sin licitación previa; estos contratos pueden tener un valor máximo de 100 millones de francos CFA (USD 150.000) en concepto de honorarios por consultoría y equipamiento y 150 millones de francos CFA (USD 225.000) para el trabajo de construcción mismo. El decreto fue considerado por muchos como un medio para desarrollar un electorado político. Los medios también advirtieron que la tendencia preponderante era que los contratos públicos de más alto valor no pasaban por un proceso de licitación. Un nuevo código de contrataciones públicas pareció abrogar este decreto pero no hubo ninguna declaración oficial al respecto.

En Junio de 2002, el sub-comisionado anticorrupción de **Sierra Leona** criticó al procurador general por no actuar basándose en las recomendaciones de la comisión y, así, hacer ineficaz la labor de la misma. De los 57 casos que llegaron a la procuración general desde que se estableciera la comisión en Enero de 2001, tres cuartos todavía no habían recibido atención alguna. El más notorio era el del ex ministro de transporte y comunicaciones Momoh Pujeh, quien, después de una investigación de la comisión, fue arrestado en Noviembre de 2001 por participar en explotaciones mineras ilegales y por posesión de diamantes en conflicto. No se presentaron más acusaciones de corrupción contra él hasta agosto de 2002.

La comisión anticorrupción de **Nigeria** fue criticada por no poder entablar una acción contra ningún funcionario superior de gobierno desde su fundación en Setiembre de 2000. En Junio de 2002 la corte suprema eliminó un importante obstáculo en el accionar de la comisión cuando no hiciera lugar a las objeciones de varios estados en el sentido de que el organismo era inconstitucional. El gobierno central tomó una serie de medidas para acelerar su campaña anticorrupción durante el año. En Agosto de 2001, el Consejo Federal Ejecutivo aprobó una enmienda a las normas que rigen el funcionamiento de la administración pública que permite al presidente despedir a funcionarios corruptos. Al mes siguiente, el consejo aprobó el establecimiento de unidades anticorrupción en todos los ministerios federales con facultades para investigar casos y examinar todos los documentos del gobierno. La comisión anticorrupción se hará cargo de la financiación de las nuevas unidades en 2003.

Desde que asumió, la administración de Olusegun Obasanjo ha tratado de negociar un acuerdo indemnizatorio con los parientes cercanos del ex dictador de **Nigeria** Sani Abacha. En Abril de 2002, el gobierno aceptó un acuerdo que involucraba el retorno de USD 1.200 millones en fondos del estado, pero permitió que Abacha retuviera USD 100 millones y debieron retirarse las acusaciones de robo y lavado de dinero contra el hijo de Abacha y uno de sus socios comerciales.

En **Ghana**, el vice auditor-general reveló en Marzo de 2002 que se habían abonado más de USD 20 millones a aproximadamente 2.000 personas inexistentes en los dos años anteriores. Como respuesta, el ministro de finanzas ordenó un recuento de los empleados públicos.

En **Burkina Faso**, una encuesta sobre corrupción identificó a la policía como la institución más corrupta del país, y una encuesta realizada por Foro Civil en Senegal señaló a la policía de tránsito, a los agentes de aduana y al departamento de policía como las instituciones más corruptas.

Casi todos los agentes de aduana en **Benin** tienen al menos un *klébé* trabajando para él. Los *Klébés*, o "destripadores de billetes" en la jerga de los estafadores del sur de Benin, ayudan a los agentes de aduana a "controlar la corrupción", y ganan una comisión del 10% sobre las incautaciones. También cobran peaje ilegalmente a todos aquellos que quieran pasar mercaderías por la aduana, un peaje del cual también obtienen su parte los agentes de aduana. En Krabé, en la frontera con Nigeria, hay alrededor de 400 *klébés*, cuatro veces más que agentes de aduana. La función que desempeñan los *klébés*, que no quieren ser identificados, es la de intermediario, una suerte de pantalla entre los tomadores y los receptores de sobornos. En el puerto de Cotonou, los *klébés* incluso han reemplazado a los agentes de aduana en varios puestos de control.

África Central

En **Guinea Ecuatorial**, la estrategia de reducción de la pobreza exige la implementación de medidas para combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad. En **Chad**, el Banco Mundial continuó haciendo esfuerzos el año pasado a fin de evitar la corrupción en el proyecto de la Cuenta Petrolera Doba, la mayor inversión de Estados Unidos en África. El proyecto para la construcción del oleoducto Chad-Camerún de USD 3.700 millones, financiado por el Banco Mundial y un consorcio de petroleras lideradas por ExxonMobil, ha sido duramente criticado por los grupos ambientalistas como el Fondo de Defensa Ambiental de Washington. Preocupa cada vez más el hecho de que el Presidente Idriss Déby, cuyo arbitrario gobierno inquieta a los aliados regionales e inversores extranjeros, esté dispuesto a controlar los ingresos derivados del proyecto, que se espera que produzca hasta 250.000 barriles por día después de que comience a funcionar en 2003. En una desviación drástica de las políticas de difusión de información en el mundo en desarrollo, el Banco Mundial habrá de auditar y publicar las cuentas anuales de petróleo de Chad.

En el último año presenciamos un flujo constante de denuncias de corrupción en la industria forestal de **Camerún**. El Banco Mundial y el Departamento para el Desarrollo Internacional (DDI) del Reino Unido confirmaron que compañías británicas y otras compañías internacionales habían talado áreas de hasta 80.000 hectáreas (200.000 acres) sin permiso; las inspecciones realizadas por observadores nombrados por el gobierno a fines de 2001 y principios de 2002 demostraron que casi todas las más importantes compañías forestales en Camerún habían actuado ilegalmente, en ocasiones o en todo momento. En Abril de 2002, el Banco Mundial instó al Presidente Paul Biya a procesar judicialmente a las compañías que habrían cometido delitos y a combatir la corrupción dentro de esa industria, o a arriesgarse a perder la ayuda oficial. Tanto el Banco Mundial como el BID y el DDI han asistido a Camerún en la regulación de las compañías forestales internacionales.

África Oriental

Una encuesta de KPMG de más de 400 CEO y vicepresidentes de finanzas, publicada en Junio de 2002, sugirió vehementemente que el fraude y la corrupción en los negocios están aumentando en África Oriental. El 61% de los consultados respondió que el fraude era un problema de envergadura y el 88% dijo que sus compañías habían sufrido algún tipo de fraude durante el año anterior. El factor clave eran los débiles controles internos, pero los encuestados también citaron la creciente sofisticación de los delincuentes y la ineficacia del sistema de justicia.

El habitante promedio de **Kenia** paga 16 sobornos por mes, de acuerdo con el Índice de Sobornos Urbanos de Kenia, una encuesta realizada por Transparency International Kenya. Las erogaciones en concepto de sobornos, entonces, ascienden a KSh 8.185 (USD 104) por mes, en comparación con el ingreso promedio mensual entre los consultados de sólo KSh 26.000 (USD 331). Los empleados públicos son los más sobornados, lo que representa un 99% del valor total de sobornos ofrecidos. Se descubrió que los más transgresores eran los miembros de la fuerza policial: seis de cada diez residentes urbanos dijo haber pagado algún tipo de soborno a la policía.

En **Etiopía**, la Comisión Federal de Ética y Anticorrupción (CFEAC), en uno de sus primeros casos más resonados, acusó formalmente a 41 funcionarios actuales y pasados del Banco Comercial de Etiopía. También se presentaron acusaciones contra otros 12 ex directores de instituciones gubernamentales y

empresarios que fueron arrestados en Mayo de 2001. Uno de los imputados era el líder de un grupo disidente dentro del partido gobernante.

Se comisionó una nueva central eléctrica en **Tanzania** en Enero de 2002, reavivando las acusaciones que sostenían que la compañía de Malasia que la construyó le habría pagado a funcionarios de gobierno. El controvertido contrato por USD 40 millones para un sistema de control de tráfico aéreo entre British Aerospace y el gobierno fue criticado por los expertos de aviación del Banco Mundial.

En **Uganda**, las organizaciones cívicas fueron quienes lideraron los intentos de presionar al gobierno para que los métodos de adjudicación de contratos sean más transparentes. Durante 2001, solicitaron al Banco Mundial que enviara un panel de investigadores para establecer, entre otras cosas, si había corrupción en el Acuerdo de Compra de Electricidad (ACE) entre el gobierno y la multinacional estadounidense AES para construir la represa Bujagali de USD 500 millones. El Banco envió un panel de inspectores; el informe resultante criticó muchos aspectos del proyecto, inclusive la decisión del Banco Mundial de mantener el ACE en secreto. En Junio de 2002, el Banco Mundial anunció que suspendería el préstamo para la represa por las acusaciones de corrupción.

África del Sur

La corrupción es un problema generalizado en **Zimbabwe**, y un reciente informe económico de la ONU comentó que "muchos de los problemas en todos los sectores de Zimbabwe pueden vincularse a una dificultad central: la crisis de gobernabilidad". Las elecciones presidenciales de Zimbabwe en 2002 se percibieron como injustas después de que las autoridades redujera el número de sedes electorales en los bastiones urbanos de la oposición, obligando a los votantes a hacer cola durante 30 horas. En las áreas rurales se alegó que se agregaron 400.000 nombres al padrón electoral luego del cierre oficial de la votación.

La licitación para tercerizar la administración de **Malawi Telecommunications (MTL)** fue adjudicada a un grupo que incluía al ministro de información y la presidenta de MTL, que también es la esposa del ministro de asuntos presidenciales. La Oficina Anticorrupción arrestó a cuatro funcionarios jerárquicos de MTL por irregularidades en el proceso de licitación, aunque posteriormente reanudaron sus tareas después de pagar una fianza, en lugar de ser suspendidos con goce de sueldo.

El juicio por corrupción más importante de la región finalizó en Junio de 2002 con la condena de Masupha Ephraim Sole, ex CEO de **Lesotho Highlands Development Authority**, condenado a 18 años de prisión por el delito de cohecho. Las pruebas confirmaron que se habían acreditado millones de rands en la cuenta suiza de Sole provenientes de firmas consultoras que habían participado en el proyecto de construcción de la represa. Lesotho marcó un importante precedente regional en el tratamiento acordado a las compañías internacionales que ofrecen sobornos al condenar a funcionarios de Lesotho Highlands Development Authority (LHDA) por aceptarlos. Después de la condena del CEO de LHDA en junio de 2002, debían ser enjuiciadas compañías del **Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Sudáfrica y Suiza**. El gobierno provincial de Sudáfrica anunció que "si eran declaradas culpables de cohecho", las compañías involucradas - que incluían importantes grupos de ingeniería civil de Sudáfrica- serían descalificadas de la licitación para la futura construcción de un servicio ferroviario metropolitano.

Tras una investigación de compras de armas en Sudáfrica realizada conjuntamente por la dirección de procesamientos públicos, el protector del pueblo y el auditor general, se publicó un informe en noviembre de 2001 que exoneraba a los miembros del gabinete del Presidente Thabo Mbeki, pero que, a la vez, expresaba serias reservas en cuanto a la administración de los procedimientos de licitación. Se mencionaron en el informe con nombre y apellido aquellos funcionarios que habían recibido sobornos de los oferentes. El informe también alegó que el jefe de compras del departamento de defensa había favorecido a empresas en las cuales su hermano tenía una participación. El informe no fue "absolutorio" como decía la oposición, aunque sí fue demasiado permisivo en la exoneración del gobierno.

En **Zimbabwe**, el brazo inversor del partido gobernante ZANU PF, Zidco Holdings, fue acusado de ser el vehículo de enriquecimiento de los líderes del partido, de acuerdo con un informe de TI Zimbabwe, *La Nueva Puja por África*, publicado en abril de 2002. Zidco nunca publicó estados contables auditados ni ningún otro registro financiero, dicen los autores, ni tampoco utiliza las utilidades para financiar actividades

partidarias. Zidco controla una gama de intereses comerciales en el país, y sus subsidiarias participan activamente en empresas de la **República Popular del Congo** a quienes el ejército de Zimbabwe garantiza protección e influencias.